



**“OBJETOS DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS
DE JURISDICCIÓN**

2. Como resultado del punto anterior gire atento
oficio al Registro Civil indicando que el ACTA de
nacimiento (distinto del certificado) sea expedida con los
nombres de los padres biológicos, es decir se nos
reconozca como padres a los suscritos ***** *****
***** y ***** *****.

2

Con fecha quince de octubre de dos mil veintiuno
***** y *****, contrajeron
matrimonio en *****, *****.

Por lo anterior, se implantaron dos embriones en el útero de la gestante subrogada de nombre ****, los cuales fueron el producto de las células germinales llamadas espermatozoides aportadas por el matrimonio antes citado, y dos óvulos obtenidos de un banco de donantes anónimas, careciendo dicho embrión de algún gen de la gestante subrogada.

La persona gestante no pretende contraer ningún derecho de filiación o responsabilidad parental con el menor de edad y que tampoco existe ánimo de lucro de ninguna de las partes, ni contraprestación alguna, sino el principal motivo es el ejercicio efectivo del derecho humano para engendrar y formar una familia.

4



R.C. 191/2023

jurisdicción voluntaria correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, donde se radicó con el número de expediente *****; y, en auto de **ocho de agosto de dos mil veintidós**, el juez de origen se declaró **no competente** para conocer del asunto, y como consecuencia de ello **dejó de admitir a trámite las diligencias de Jurisdicción Voluntaria**, por considerar lo siguiente:

“[...]

En primer término, porque conforme a lo previsto por nuestra legislación Adjetiva de la materia, en el numeral 1º, solo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho, sin embargo en la especie, los derechos humanos de ***** y ***** a fundar una familia, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, incluso mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, así como el libre desarrollo de la personalidad, se encuentran previamente declarados y plenamente reconocidos por nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales de los que México es parte; ya que, como se consagra el artículo 1º de la Constitución Política de nuestro país, (...)

De ahí, que por el dicho de los propios ocurrentes plasmado en el apartado de procedencia de la vía, se desprende su manifestación expresa de no solicitar la constitución de un derecho, sino la mera declaratoria del mismo; por tanto, al encontrarse previamente declarados



Del mismo modo, resulta inviable que éste Juzgador constate el procedimiento de subrogación materna, como lo pretenden los ocursantes, ya que derivado del contrato de maternidad sustituta, es obligación de los señores ***** y ***** dar el seguimiento correspondiente a la señora ***** ***** , durante el desarrollo del embarazo y hasta su conclusión; resaltando el hecho



En segundo lugar, es importante resaltar que por la naturaleza jurídica de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, éstas no son eficaces para constituir derechos o generar obligaciones, básicamente porque la resolución que se pronuncie no opera la figura de la cosa juzgada y tampoco surte efectos contra terceros, ya que las diligencias se tramitan unilateralmente por los interesados, sin la intervención de quien pudiera tener derechos opuestos; máxime que tales resoluciones no dan lugar a ejecución; por tanto, la procedencia del levantamiento del acta de nacimiento solicitada no podría decretarse.

Se suma a lo anterior, que de verificarse el nacimiento de un niño o niña, derivado del contrato de maternidad subrogada celebrado, es competencia del Juez del Registro Civil registrar los actos relativos al nacimiento conforme al artículo 35 fracción I del Código Civil para esta Ciudad, en relación con lo establecido en los numerales 46 y 58 del Reglamento del Registro Civil para la Ciudad de México, pues atendiendo a una interpretación conforme del penúltimo párrafo del ordinal 46, (...) Sin que válidamente pueda negarse a levantar el atestado de nacimiento de un niño o niña nacido dentro

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Órgano Jurisdiccional que conforme a la fracción VI del artículo 52 de la Ley de Migración, cuando un extranjero pretende establecer filiación por medio de la Adopción, se autoriza su estancia en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y en su caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país; de ahí que, aun cuando las diligencias promovidas por los señores ***** y *****

8

***** , ***** y *****

“RESOLVE:

***** ***** ***** y ***** *****

TERCERO.- No se hace especial condena en costas procesales

SEGUNDO. Juicio de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, los quejosos ***** , ***** y ***** , por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y los actos reclamados siguientes:

1. Aclararan sí ya habían acudido a solicitar el acta de nacimiento de la menor ante el Registro Civil.

3. Indicarán si deseaban señalar como nueva autoridad responsable al Registro Civil en la Ciudad de México.

Desahogo de prevención de los quejosos.
Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintidós, los quejosos desahogaron la prevención previamente descrita, donde manifestaron bajo protesta de decir verdad que, en diversas ocasiones acudieron al

CUARTO. Desechamiento del proyecto y retorno del expediente. En sesión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por mayoría de votos, el Pleno de este Tribunal determinó desechar el proyecto presentado y, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, se retornó a la **Magistrada Sofía Verónica Ávalos Díaz** en acuerdo de tres de julio posterior.

QUINTO. Lista y sesión virtual del expediente. El asunto se listó el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, para sesión ordinaria virtual de treinta del mismo mes y año, fecha en la que se discutió y resolvió, en términos del artículo 52 Octodecies fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, emitido el catorce de octubre de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

Puntualizó que el infante goza del derecho a la identidad, aunado a que todos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad de los menores de edad.

Asimismo, señaló que no se advierte ninguna vulneración al libre desarrollo de los quejosos, pues en ningún momento hubo cuestionamiento de la manera en que decidieron conformar su familia, o algún

Manifiesta que al no haber requerido a la representante especial de la menor de identidad reservada, antes de la admisión de la demanda de amparo indirecto, es que se dejó en estado de indefensión a la menor, pues en el caso hubiera intervenido en el desahogo de la prevención de veinticinco de noviembre del dos mil veintidós, como lo señala el artículo 8 de la Ley de Amparo.

Asevera que, al solucionar la Litis se debe hacer en estricto apego al interés superior del menor, adoptando el criterio que más le favorezca a su sano desarrollo, incluso, suplir la deficiencia de la queja.

20



Esgrime que el acto reclamado viola en perjuicio de la menor de edad, el derecho humano a una tutela judicial, acceso a la justicia, debido proceso y formalidades esenciales del procedimiento.

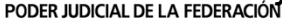
QUINTO. Estudio. Los agravios son infundados, a pesar de acudir a la suplencia en la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

21

22

Así como, la tesis aislada 1a. CXXII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, página 260, registro digital 2000988, de rubro y texto siguiente:

24



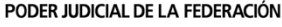
duro" de los derechos."

25

Ello, porque en este caso, el acto reclamado únicamente lo fue la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de apelación ***** , del índice de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el cual se confirmó el acuerdo ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente de **Jurisdicción Voluntaria** ***** del Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, por el cual se desechó el escrito inicial.

Por lo que, en principio, conviene analizar si la jurisdicción voluntaria es la vía idónea para lograr el propósito de los quejosos, así como de la representante especial: la inscripción de la niña en el Registro Civil, nacida mediante la Técnica de Reproducción Asistida (TRA) de maternidad subrogada por sustitución.

La **jurisdicción voluntaria** puede definirse como la función que ejercen los Jueces, a solicitud de una o varias personas, en los casos especialmente previstos en la ley, que tiene como finalidad cooperar en el



En este orden, es parcialmente incorrecto lo determinado por la Juez de Distrito, porque la vía de jurisdicción voluntaria no sólo es apta para realizar actos de mera constatación de hechos, sino que también se ejerce también, entre otros casos, tratándose de actos que requieran de una formación especial o de especiales garantías de autoridad, como sucede cuando la eficacia

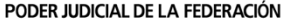
Ahora, dado que esa no es la vía idónea para lograr el registro de la niña de identidad reservada, intención coincidente de todos los involucrados en este amparo, este Tribunal advierte que no existe proceso contencioso para lograr ese propósito.

28

Como se aprecia, efectivamente el Poder Ejecutivo fue autorizado por el Poder Legislativo para llevar a cabo la reforma, entre otros ordenamientos, del Código Civil (*“Código Civil para el Distrito Federal de 1928”*, de Joel Jiménez García, *Revista de Derecho Privado. Nueva Serie*, Nueva Época, año II, número 5, mayo-agosto, año 2003; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; páginas 24 y 25).

Mientras que el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los días uno al veintiuno de septiembre de mil novecientos treinta y dos, emitido por el entonces Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, en uso de las facultades extraordinarias concedidas por Decreto del Congreso de la Unión de treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y uno.

30



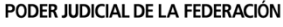
Es por ello que el derecho a la identidad entraña una importancia especial durante la niñez, y el Estado está

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [...]".

“Artículo 3

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para



Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”

El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.”

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la



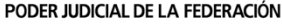
De los preceptos citados, se desprende el derecho a la identidad como derecho de los niños, el cual comprende no sólo el derecho al nombre, sino también el derecho a ser registrado de inmediato por sus padres, a conocer su origen biológico, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, de donde surge su identidad cultural; habiéndose comprometido el Estado Mexicano a respetar esos derechos de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, así como a restablecer rápidamente su identidad, cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, en términos de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la citada Convención.

1. Tener un nombre.
2. Tener un registro de nacimiento

5. Reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad.

6. Reconocimiento a la filiación y a los derechos emanados de ella, como son los alimentarios y los sucesorios.

“DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho a la identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la identidad está compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y



Por otro lado, al resolver la contradicción de tesis 430/2013, la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó que, en conformidad con los artículos 7, punto 1, y 8, puntos 1 y 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando la realidad de un vínculo biológico no se encuentre reflejada en el plano jurídico, el Estado debe reconocer el derecho del menor de edad (incluso del mayor de edad) para lograr el estado de familia que corresponda con su relación consanguínea, pues es un derecho del hijo tener la filiación que le corresponde y no una mera facultad de los padres hacerlo posible, por ello, dicha Sala concluyó que la tendencia debe ser que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica.

No obstante, en esa misma ejecutoria se reconoció también que no siempre es posible que exista esa coincidencia de filiación jurídica y biológica de la persona, bien sea, por la realidad del supuesto de hecho en que ésta se encuentra, o bien, porque el ordenamiento jurídico hace prevalecer otros intereses que considera jurídicamente relevantes.



Asimismo, la Primera Sala destacó que, como los efectos de la filiación no se agotan en el conocimiento del propio origen biológico, sino que implican la adquisición de un cúmulo de derechos del hijo frente a los padres y constituye el centro de diversos derechos y deberes, cualquier decisión sobre la filiación de un menor de edad debe tomar en cuenta los hechos que rodeen el caso concreto y resolver atendiendo siempre a lo que sea mejor para él.

De modo que el derecho a la identidad se dota de contenido, entre otras hipótesis, en el momento en que se determina la filiación de una persona, entendida ésta como el vínculo jurídico que existe entre dos personas, en la que una se identifica como descendiente de la otra, y puede darse como una consecuencia de circunstancias biológicas; pero también mediante actos jurídicos.

Lo anterior da lugar a concluir que el derecho a la identidad de los menores de edad debe ser interpretado

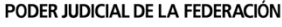


Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis CCCXXI/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo I, página 577, registro digital 2007455, de rubro y texto siguiente:

39

Así como, a la tesis 1a. CCCXX/2014 (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo I, página 578, registro digital 2007456, de rubro y texto siguiente:

“FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS. Esta Primera Sala ha reconocido la existencia de principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación y reconocimiento de paternidad. Entre estos principios se encuentran, de manera ejemplificativa y no limitativa, la no discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la verdad biológica, la incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas y, de manera preeminente, la protección del interés del hijo. Al respecto, debe tenerse presente que es un derecho del hijo tener su filiación



Cabe precisar que en los términos antes citados se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al reconocer en el “*Caso Forneron e hija vs. Argentina*”, (Fondo, Reparaciones y Costas; 27 de abril de 2012; párrafo 123), el derecho a la identidad, el cual – afirma- puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Es por ello que la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los

En esos términos, atendiendo a la obligación constitucional de velar por el interés superior de la niña, así como, a lo que establece el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, este Tribunal Colegiado debe priorizar y garantizar el derecho a la identidad, filiación y personalidad jurídica de la infanta, en virtud de que tiene derecho a ser registrada ante el Registro Civil, con independencia del reconocimiento jurídico o no de la gestación sustituta.

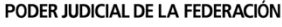
Lo anterior, porque dicho registro garantizará el derecho de la niña a un nombre y apellido, así como su nacionalidad, pero sobre todo su derecho de filiación (parentesco que lo une con sus padres), satisfaciéndose así su derecho humano de identidad de manera íntegra.

En efecto, para determinar la identidad de un menor es necesario e indispensable que éste cuente con un registro de nacimiento.

Al respecto, el artículo 19, fracción I, de La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuente con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos.”

“Artículo 58. El acta de nacimiento contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre o nombres propios y los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que ellos convengan, el Juez del Registro Civil deberá especificar,



Así, dicho ordenamiento dispone también que el registro debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al nacimiento, pues posteriormente se considerará que el registro es extemporáneo y deberá estarse a lo que disponga el Reglamento del Registro Civil. Tal como se evidencia del artículo 55 siguiente:

“Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento ante el Juez del Registro Civil de su elección, el padre y la madre o cualquiera de ellos; a falta de

Para el registro de nacimiento a domicilio deberá estarse a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Civil.”

El precepto en cita dice:

46

También, los padres están obligados a presentar a reconocer a sus hijos e hijas, y bastará que así lo expresen para tener por cierto esas manifestaciones, dado el principio de buena fe que conduce la actuación del Registro Civil, pues cualquier contradicción se debe dirimir en la vía judicial contenciosa correspondiente:

Cuando no estén casados, el reconocimiento se hará concurriendo los dos personalmente o a través de sus representantes, ante el Registro Civil.

La investigación tanto de la maternidad como de la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo a las disposiciones relativas a este Código.

Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, edad, ocupación y domicilio.”

“Artículo 940. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquélla la base de la integración de la sociedad.”

En efecto, el Alto Tribunal consideró que la ausencia de regulación en la normatividad secundaria no debe erigirse como un impedimento para el reconocimiento, protección y vigencia de los derechos fundamentales de las personas, ya que por mandato expreso del artículo 1°



Asimismo, el Máximo Tribunal determinó que atendiendo al interés superior del menor y tutelando su derecho a la identidad, en específico, a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre, y considerando las pruebas aportadas valoradas por los Tribunales Colegiados contendientes en esa contradicción de criterios, generaban suficiente convicción de que ese niño sí nació como resultado de la aplicación de la técnica de reproducción conocida como maternidad subrogada, en que uno de los quejosos aportó el gameto masculino, por lo que había un vínculo biológico con él; y asimismo, que el bebé se encontraba bajo el cuidado y en el seno familiar de la pareja de los quejosos, sin que la madre gestante hubiera reclamado

Todo lo anterior, precisando la Primera Sala que, debía entenderse sin perjuicio del derecho del niño para que, en el momento en el que él lo decida, conozca su origen biológico, como parte de su derecho a la identidad, de modo que se garantiza la vigencia del derecho del niño a tener una identidad y ser inscrito en el Registro Civil; el derecho de los quejosos a su vida privada y a procrear mediante el acceso a las técnicas de reproducción asistida; y el derecho de la tercera interesada también a su vida privada y libre desarrollo de la personalidad.

Esas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. LXXXVIII/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, octubre de 2019, Tomo II, página 1159, registro digital 2020789, de rubro y texto siguiente:

“FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA. La ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, y particularmente de la llamada maternidad subrogada o útero subrogado, no debe erigirse en impedimento para que el Juez se pronuncie al respecto, no sólo porque el silencio de la ley no lo autoriza a dejar de resolver alguna

Ahora, en el caso, la recurrente únicamente se duele de que el juez de Distrito no la requirió en su carácter de representante especial de la niña de identidad reservada para que manifestara si era su deseo señalar o no como acto reclamado la negativa de expedir el acta de nacimiento por parte del Registro Civil de la Ciudad de México y, por ende, como autoridad responsable, lo cual estima vulneró los derechos fundamentales de la menor de edad.

Esto es, si bien la Juez de Distrito no requirió la recurrente para efecto de que manifestara si era su

Asimismo, se precisó en dicho contrato que las partes eran mayores de edad, que tenían plena capacidad de goce y ejercicio para celebrar el contrato, sin restricción legal ni judicial alguna; y, que los gastos erogados durante la gestación serían cubiertos por ***** y ***** –matrimonio contratante-.

Ahora, de las diligencias de jurisdicción voluntaria se advierte que correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Familiar de Proceso Oral de la Ciudad de México, donde en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós,

Luego, de la relatoría antes precisada se desprende que es cierto que la Juez de Distrito no requirió a la representante especial de la niña para que manifestara si era su deseo o no señalar como acto reclamado la negativa de expedir el acta de nacimiento de la niña, y, por ende, señalar como autoridad responsable al Registro Civil, lo cual daría lugar a reponer el procedimiento y que se realice nuevamente dicho requerimiento.

Entonces, ha quedado evidenciado que las diligencias de jurisdicción voluntaria no son aptas para el propósito buscado por los quejosos y la representante especial recurrente.

En conclusión, ante lo **infundado** de los agravios, lo procedente es **confirmar** la sentencia impugnada y **negar** la protección constitucional.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos



R.C. 191/2023

81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo y 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se

RESOLVE:

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** a la niña quejosa de identidad reservada, por conducto de su representante especial *****

contra la resolución de veinticinco de octubre de dos mil
veintidós, dictada en el **recurso de apelación**
***** , del índice de la Segunda Sala Familiar del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por
la cual se confirmó el acuerdo ocho de agosto de dos mil
veintidós, emitido en el expediente de **Jurisdicción**
Voluntaria ***** del Juzgado Quinto de lo Familiar
de Proceso Oral de la Ciudad de México, así como sus
consecuencias.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese este tomo como asunto concluido.

Así lo resolvieron y firman los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por mayoría de votos de la Magistrada **Sofía Verónica Ávalos Díaz** y del Magistrado **Víctor Francisco Mota Cienfuegos**, contra el voto de la Magistrada **Cecilia Armengol Alonso**, siendo Presidenta y ponente la



Este asunto se firma de manera electrónica con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y el considerando séptimo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, lo que se advierte de la evidencia criptográfica que se anexa a continuación. Doy Fe.

La presente ejecutoria fue firmada dentro del término que señala el artículo 184 de la Ley de Amparo. Ante mi fe, hoy siete de septiembre de dos mil veintitrés. Conste.

Razón. En esta fecha se giró el oficio 8003. Conste.

SVAD/MAVR/mpf.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
61825480_0027000032643908004.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE					
Nombre:	José Manuel Martínez Villicaña		Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA					
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.83.b7		Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/09/23 19:56:26 - 07/09/23 13:56:26		Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256				
Cadena de firma:	4b d2 c3 e6 43 0f 2a 02 c8 e5 f6 8f c6 fd 17 6e d3 2f c3 3e 40 19 f8 9e 3c 8b 4b fe 8b 3b 55 b4 b2 c3 13 9e a0 0f ca f0 64 5b 22 60 90 a3 99 b5 e4 ce b0 c9 1f c0 54 20 ca f0 f7 11 42 9b 36 fc bc 09 61 09 2f ed ba 3f 9c 77 7c e9 ca ac 23 88 83 61 01 ce 63 32 4b 0a af 5b 91 5e fe 2b 17 a1 cc 4b b9 dc 07 78 4d b5 60 af db 79 e0 d5 82 c8 50 c9 5f f2 23 36 91 0d c1 81 31 67 3e 09 64 ba 50 64 c4 63 70 32 fd f8 62 ac 59 55 14 f5 fe e2 39 9f c8 77 79 36 e8 a9 b6 68 11 ff 10 0f 7e 33 c0 67 d3 8d c5 73 01 e9 71 4b c3 00 33 7c 8a ef 59 d1 ca 05 6b 02 91 73 5e fa f5 13 64 ee fe 6a 6f 62 47 5e 16 fb 31 8a 70 66 d2 55 f4 24 59 a8 e6 aa 1e c2 76 03 3a 2b cc dc 1f d1 aa 99 77 07 ab ef af 1d 37 58 fd 08 b8 9d df 65 2c 8f 33 60 d8 db b4 09 79 f1 1a 97 29 8b 8e da 63 99 55 f4				
OCSP					
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/23 19:56:26 - 07/09/23 13:56:26				
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03				
TSP					
Fecha : (UTC / CDMX)	07/09/23 19:56:26 - 07/09/23 13:56:26				
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal				
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal				
Identificador de la respuesta TSP:	40210614				
Datos estampillados:	2ApS22UztNWrc3P+Ny7Stczbtg=				



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	SOFIA VERONICA AVALOS DIAZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.51.5e	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/09/23 19:57:08 - 07/09/23 13:57:08	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	77 31 46 96 27 ac 66 38 a0 8a ab 07 14 64 d5 e6 6d 99 72 1b 25 fd 8c 25 1a 9f 52 38 eb c9 54 51 f0 0a 4e a0 10 01 5f ca 2b 34 af 57 8d a2 05 3d 8d e5 4e 77 e6 e6 ea 59 ff b8 9f 52 b2 17 0f 36 26 01 eb d9 82 e1 58 b9 96 62 15 ee e2 9f 01 47 93 23 f8 f1 25 f1 40 ab 09 31 7a fc e3 d4 32 d9 b8 94 44 5d 03 29 10 9c c3 ff c1 ad 00 86 2d 91 f7 c6 84 e9 71 54 ba 77 63 d5 0b a1 f4 15 9d 5e 6c a9 16 de 41 c4 58 83 e9 b6 3d d4 36 2c 18 97 9c ec 7a 43 88 0b 52 cb 00 0d 4d 4a 05 57 48 07 57 21 6f 36 be 6a 2f 30 77 f6 ce d0 d9 fa 6a a4 65 ea 73 81 06 cd e4 f4 c5 8a a9 1c 4f 21 94 d8 4e 94 a7 3a 83 40 43 cd a9 2e dc af f5 2a 74 9b 6f f1 e3 c6 a3 a1 bf 18 16 bf 53 59 03 da ce 3c fa 81 e5 71 b5 61 d2 93 13 b3 19 ea 1b 75 00 ad 7f 25 90 ed 52 24 05 8f 21 98 31 f2 b8 e1 2c 81			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/23 19:57:09 - 07/09/23 13:57:09			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	07/09/23 19:57:09 - 07/09/23 13:57:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	40211221			
Datos estampillados:	+JmTkg9g6kRY/D80aWJOWQIT6g0=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	CECILIA ARMENGOL ALONSO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.34.85	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/09/23 21:37:20 - 07/09/23 15:37:20	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	77 08 00 63 14 83 0b 30 59 f4 98 fc 9c 06 85 b3 f4 ce 2d 41 02 66 3b 2a e8 38 56 dd 83 35 ca dc be 1f 87 36 e9 56 ec 5e d0 c5 ec 24 6e 61 6b ef e7 58 2b 0b 48 97 9b 17 80 91 b3 1c 23 46 22 7b 78 e1 ea 3a d6 a7 90 f7 3f 3a d9 26 7d e2 3b 84 04 80 48 cd e7 39 13 6b ab 56 61 9b 39 1e 5f ce e0 10 03 35 fb 24 5b 63 95 74 1c 82 78 e7 9e 36 7c c5 dd 94 16 8b 3d 87 c7 93 2f ab e8 c5 f9 73 82 f7 90 95 7b 82 96 d8 3c 90 2e 82 b8 ca 28 07 73 54 f8 8b 0e 0a f4 16 e9 f9 07 b2 64 5d dd c2 7e 64 2a ba 33 ab 38 40 d5 57 e0 92 66 b1 25 7c 65 e8 d1 71 ce 52 17 ba dd 5b e5 76 3d 95 87 21 e3 22 00 4e 48 ce 25 b8 b6 dd 26 43 82 cc da bd 54 72 50 39 e6 3c 5c 14 4a 33 8e f6 da 4a 35 ad d1 dc c2 ad de 52 db 4a 3c 84 f6 59 09 60 d3 d8 ae 2c 73 7f cb 96 15 e5 e3 b4 7d 25 61 53 11 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/23 21:37:21 - 07/09/23 15:37:21			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	07/09/23 21:37:21 - 07/09/23 15:37:21			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	40306090			
Datos estampillados:	OF8hysPXKO9pFVkoSle5R+cgb2o=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Víctor Francisco Mota Cienfuegos	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.34.8a	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	07/09/23 22:08:39 - 07/09/23 16:08:39	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	af 70 62 85 61 e7 64 c5 e1 b4 a0 d1 a2 ee 52 5c ad a5 53 ea 80 12 62 8a 88 e3 03 83 e8 59 d2 78 7a b0 90 10 0f 29 df a4 54 c6 96 dc b7 2b af cc 06 11 23 9e 9f 78 e3 c4 ae 86 24 33 25 82 33 fd 62 05 6e 9f f3 e5 c2 71 56 03 70 9b fd 28 85 97 a6 4a 07 8d 56 44 13 79 df ab b3 c7 72 f4 f2 73 20 66 0d 82 7d ab 18 64 3a e4 43 b5 43 9e 58 79 78 5a f7 7f 20 74 e7 22 db 53 41 1e dc cc 41 19 e3 5d 63 a8 3c e9 61 88 bd 9e 6d 34 3a e6 9f f2 9b 42 ec de 69 91 63 c5 cd f9 4f 23 ef e1 81 25 23 e6 5a 5b a4 25 ad e3 ae dc 1f 3f 09 d7 b3 3d 45 75 00 05 6e 95 fc 15 dc 56 a4 72 04 6f 17 5b 9a 13 a1 16 ea d1 c3 02 4e cf 63 b2 52 43 0e 9e c9 cf 4c d7 01 8d 7d a1 f4 fe dd 55 4d fa fd 58 31 4b 24 3c 8f d8 be 13 ed 83 dc 5b e8 4e df 5e ee 80 51 49 aa 13 85 0b 96 e8 04 b3 f6 d3 94 d7			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/23 22:08:39 - 07/09/23 16:08:39			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	07/09/23 22:08:39 - 07/09/23 16:08:39			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	40326098			
Datos estampillados:	/hnS7X8REtB+KmuuU48UTewy58w=			

El siete de septiembre de dos mil veintitres, el licenciado Miguel Ángel Vadillo Romero, Secretario(a), con adscripción en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.